

ECONOMÍA INTERNACIONAL

N° 440, 1 de Julio de 2008

AL INSTANTE

ARGENTINA: CONFLICTO AGRÍCOLA LLEVA A DEBILIDAD ECONÓMICA Y DETERIORO POLÍTICO

La intervención de la fuerza pública en el conflicto entre dirigentes agrícolas argentinos y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que ya se prolonga por más de tres meses y la detención del dirigente agrícola Alfredo de Angeli en la carretera 14, junto a 18 manifestantes, volvieron a generar, el 15 de este mes, un bloqueo vial y un paro hasta el miércoles 18 de Junio, que posteriormente se alargó hasta el 20 de Junio.

La huelga fue anunciada por las cuatro principales entidades del sector agropecuario, a través de la Mesa de Enlace del Agro. Su naturaleza es, específicamente, un “cese de comercialización de productos agropecuarios, exceptuando lácteos y perecederos”.

Espontáneamente, se produjeron otras manifestaciones en provincias agrícolas, como Santa Fe, Entre Ríos y en las ciudades de Rosario y Buenos Aires. Además del conflicto del campo argentino con el Gobierno por asuntos tributarios, existe molestia en la población por la creciente inflación de niveles, que se ha elevado a niveles de

entre 20 y 30%, por la deficiente conducción política de la Presidenta de la República, respecto de la cual tenían expectativas más altas, y por la incapacidad del Gobierno para dialogar y resolver la crisis, que crea incertidumbre y tensión al pueblo argentino.

Políticamente el Gobierno, en forma antidemocrática, ha querido identificar a los huelguistas del campo con una oligarquía golpista, mientras éstos, a través de sus dirigentes, dicen: “No queremos voltear al Gobierno. Queremos un país democrático, federal y republicano”. Paradojalmente, el Gobierno dio muestras de autoritarismo al intentar elevar impuestos sin pasar por el Congreso.

La controversia surgió por la decisión unilateral del Gobierno, en Marzo pasado, de introducir una escala deslizante de impuestos a la exportación de Soya, que desde 27%, se elevó a 40%, a un precio actual de US\$ 495 por tonelada y continúa subiendo. Si el precio de la soya llega a US\$ 600 por tonelada, el impuesto alcanzará a un 95%. Todo esto, sin consulta al

Parlamento, como corresponde normalmente, en un régimen democrático. En estos términos, a través de una tasa progresiva de impuestos, el Gobierno pone un techo a la producción y exportación de soya, lo que a su juicio evitaría que no se produzcan otros cultivos y exista inseguridad alimentaria para la población.

En términos económicos, se crearían fuertes desincentivos a la producción y exportación de soya, donde existe alta productividad, eficiencia y ventajas comparativas de Argentina frente a otras economías, con el objeto de fomentar la producción de cultivos de más baja productividad y con menor competitividad internacional, es decir, se avanzaría hacia una autarquía ineficiente.

El conflicto con el campo empezó inesperadamente en Marzo y se ha prolongado ya por tres meses, amenazando continuar y provocar mayor desgaste político y económico, que afecta aspectos sensibles, como son la aprobación del Gobierno, la inflación interna y la inversión, principalmente.

Existe información entregada por el Institute of International Finance, que señala que en Mayo, el Banco Central ha tenido que gastar US\$ 3,4 mil millones para sostener el peso. Adicionalmente, en los últimos meses se está produciendo una fuga significativa de capital y por supuesto, no existe incentivo para que entre capital extranjero o repatriación de capital argentino, por efecto del paro, y como consecuencia de los riesgos a la inversión que generan las arbitrariedades tributarias y regulatorias

del gobierno y las distorsiones económicas y de precios.

La enorme huelga agraria, que puede tener vastas consecuencias económicas y políticas, como ya se está observando, ha sido un hecho notable y sorprendente, porque ha podido unir a una dirigencia agropecuaria, tradicionalmente desunida, y ha movilizado a unos 200.000 productores, dispersos en todo el territorio. Además, se han plegado en apoyo con protestas con cacerolas, en sectores urbanos en las principales ciudades del país.

La rebeldía del campo se ha alimentado por el trato arbitrario y duro del Gobierno hacia los productores agrícolas, basado en controles de precios, precios máximos, prohibición de exportaciones, alzas extemporáneas de impuestos, discriminaciones por tamaño de agricultor, promesas no cumplidas e incapacidad de diálogo constructivo. La retención impuesta, que llegaría al 95% de la cosecha, es burdamente expropiatoria, más aún, si el esquema de alza de retenciones se establece en las proximidades de la cosecha, cuando no es posible ajustar las decisiones de producción.

En cuanto a discriminación, el intento gubernamental de dividir a los productores, exaltando y subsidiando al productor chico (65.000), y aislando y castigando al productor mayor, serían una solución económica muy negativa y dañina para la productividad de la economía, además de ser una señal lamentable sobre nuevas medidas expropiatorias que podrían afectar al campo, e incluso a otros activos, en el futuro próximo.

La desigualdad ante la ley generada deliberadamente por el Gobierno es profundamente antidemocrática y difícil de aplicar y controlar equitativamente. En el plano político electoral crea un nuevo segmento sujeto al asistencialismo y clientilismo electoral del Gobierno.

En definitiva, el campo argentino está frente a una prolongada y dura lucha para evitar que se produzcan discriminaciones, arbitrariedades e intentos expropiatorios, mediante retenciones a la exportación, prohibiciones para exportar, controles de precios o a través de un cierre selectivo de la economía. La unidad del campo es esencial para acometer esta batalla, así como la coherencia de las ideas con la lógica económica de mercado, para rechazar malas políticas públicas.

Como el Gobierno está afrontando mayor oposición en las retenciones a las exportaciones, ha sacado una nueva carta, que sería un esquema formal para asignar las rentas superiores al 35% sobre la soya. Las rentas de la retención a las exportaciones, que este año recaudarían poco más de 1000 millones, a los precios corrientes de la soya, se depositarían en un fondo, que sería empleado en la construcción de hospitales (60%), vivienda social (20%) y caminos rurales (20%).

Obviamente, este programa está destinado a mover a la opinión pública a favor del Gobierno, en esta contienda, que puede ser incierta y de larga duración. El segundo paliativo al agudo conflicto del Gobierno –productores agrícolas, ha sido el anuncio de la presidenta Fernández, del envío de un proyecto de ley al Parlamento, para que

resuelva el aumento de impuestos a las exportaciones de granos. Cabe recordar, que el Ejecutivo tiene mayoría en ambas cámaras, pero en este caso podría tener dificultad para un rápido y total alineamiento de fuerzas políticas, como ya se observa en el ámbito político de los gobernadores provinciales.

Se estima que el fondo antes mencionado no tendría efectos significativos en las finanzas públicas, porque no se diseñarían nuevas iniciativas de gasto social, sino que el fondo aseguraría los recursos requeridos para las actividades que el Gobierno está planeando ejecutar, o sea, los recursos serían para programas existentes, de modo que el superávit primario, estimado en 3,8% del PIB para este año, no se alteraría. Los resultados fiscales para Mayo, que serán entregados pronto, se prevé que serían mejores de lo esperado.

En el área de la inflación, agravada por el conflicto agrícola, diversos indicadores, aún aquellos de carácter oficial, que la subestiman, muestran que los precios continúan subiendo, fuertemente. En Mayo el índice oficial de precios al consumidor alcanza un nivel anual de 9,1%, que es el más alto del año y los precios al por mayor, también de acuerdo a índices oficiales, estarían subiendo a tasas de un 15% anual. A diferencia de las cifras anteriores, los índices “proxies” de precios al consumidor del Banco J.P. Morgan llegan a niveles anuales de 23 a 27%, para Mayo. La mantención del conflicto con productores agrícolas y de transportes, además, intensifica las carencias en la oferta de bienes agrícolas para el consumidor, especialmente urbano y por lo tanto el

desabastecimiento y el alza de precios, lo que a su vez alimenta e incide en otros precios de bienes de consumo.

La confianza del consumidor está cayendo fuertemente en los últimos meses, llegando a niveles de 37%. Tanto la percepción de las condiciones económicas actuales, como las expectativas, están bajas, alcanzando 37 a 39%.

En las cifras del PIB se observa que el crecimiento de la economía argentina, en el primer trimestre, continuó alto, en 8,9% anual, pero se torna más volátil y descendente en los trimestres que vienen, de acuerdo a las proyecciones existentes. Para el 2008 las estimaciones de expansión económica llegan a un 6,5% y en el 2009, ya el nivel de crecimiento estimado del PIB caerían a un 4% anual.

Las últimas cifras de las reservas internacionales empiezan a caer, levemente, en las últimas semanas y se sitúan en niveles, aún altos, de US\$ 49.000 millones de dólares. La cuenta corriente de la balanza de pagos está declinando, pese a condiciones externas muy favorables. Entre el 2007 y 2008, el superávit en cuenta corriente bajó, de 2,7% del PIB a un 1,8% y para el 2010 estaría en torno al 1%.

La nueva de la Presidenta Fernández, no ha dado solución y normalidad a las relaciones con los acreedores externos y la deuda privada y oficial continúa en "default". Como consecuencia, Argentina está fuera del acceso a recursos de los mercados de capitales internacionales, en la oportunidad de una fuerte crisis de crédito internacional, en que se dificulta el acceso a fondos líquidos, frente a eventuales dificultades de carácter global.

Esto, indudablemente plantea riesgos a la trayectoria de crecimiento de la economía argentina, ya afectada por las dificultades del sector energía y las políticas económicas distorsivas, que terminan afectando seriamente a la economía.

Las dificultades e incertidumbres económicas y financieras pueden llevar a que surjan nuevos e imprevistos desafíos, de carácter político, que afecten al poder político y la credibilidad del gobierno, dando lugar al comienzo de un ciclo de declinación de carácter política y económica.

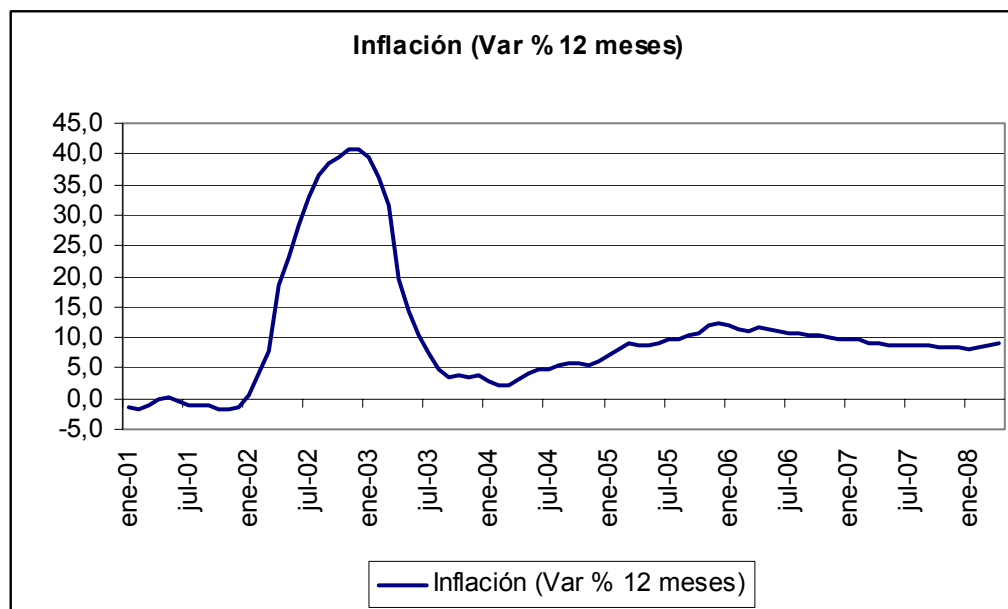
El paro y bloqueo de caminos de carácter agrario terminó pero el conflicto agrario con el Gobierno continúa en una nueva fase en el Parlamento.

Cuadro N°1
Índices económicos de Argentina

	2004	2005	2006	2007	2008p
PIB Real (var %)	9,03	9,2	8,5	8,7	6,5
Demanda Interna (var %)	11,8	9,7	9,4	10	8,8
Consumo Privado (var %)	8,3	8,5	7,4	8,8	6,5
Inversión (var %)	34,4	22,7	18,2	13,6	14
Balanza comercial (USD mill)	13.265	13.087	13.871	13.433	12.355
Exportaciones (USD mill)	34.576	40.387	46.456	55.933	59.848
Importaciones (USD mill)	21.311	27.300	32.585	42.500	47.494
Cuenta Corriente (% del PIB)	2,1	3,0	3,7	2,6	1,8
Reservas Internacionales (USD mill)	19.600	28.100	32.000	46.200	-
Inflación (var %)	4,4	9,6	10,9	8,8	9,0
Balance Fiscal (% del PIB)	2,6	1,7	1,7	1,4	-

Fuentes: FMI, JP Morgan, IIF

Gráfico N°1
Inflación
(var % en 12 meses)



Fuente: INDEC